

AGUARAGÜE, EL SAQUEO DEL SEGUNDO CERRO RICO

EN EL AGUARAGÜE SE VIVE UNA RECURRENCIA FATAL I ASÍ COMO SE AGOTÓ LA PLATA EN POTOSÍ, AQUÍ SE AGOTA EL GAS. ASÍ COMO SE EXPLOTÓ EL ESTAÑO SE ARRASA EL BOSQUE Y SE ACECHA AL AGUA. Y TAMBIÉN SE REPITIERON EL DESPOJO Y HASTA LA ESCLAVITUD

Desde el punto de vista geográfico, el Aguara Güe es la última serranía oriental de la cordillera de los Andes. A sus pies empieza la tórrida planicie chaqueña que se expande por cuatro países. Bajo la óptica de la historia, el Aguara Güe constituye el segundo cerro rico boliviano. Emergió cuando la riqueza del célebre Sumaj Orko de Potosí menguaba, cuando los hidrocarburos empezaron a desplazar a la plata y al estaño.

Y el auge de esta montaña, colmada de poder energético, ha marcado a los primeros tres lustros del siglo 21. Una leyenda asegura que con la riqueza que se extrajo de Potosí se habría podido construir un puente de plata hasta España. Más allá de las metáforas, el gas del Aguara Güe inspiró la construcción de 7.337 kilómetros de gasoductos más uno inconcluso de 1.500 kilómetros. Reacomodado, este ducto de 8.837 kilómetros, tejido entre Andes y Amazonía, podría unir Bolivia con la península ibérica, es decir, una distancia de 8.835 kilómetros (1).

Así como la plata del cerro potosino impulsó al imperio español, el gas de esta serranía tarijeña apuntaló a la hoy séptima potencia planetaria: Brasil. Baste recordar que sólo un megacampo, San Alberto, satisfizo durante tres lustros el 70 por ciento de las necesidades energéticas de Sao Paulo. Es decir, movilizó a la octava ciudad más grande del mundo. En ella se concentra el mayor parque industrial de Latinoamérica que genera el 24 por ciento de las exportaciones brasileñas.

En conjunto, en dos décadas Bolivia proveyó entre el 70 y 31 por ciento del gas que consume Brasil. En ese tiempo, el Aguara Güe produjo entre 80 y 60 por ciento del gas exportado al coloso sudamericano. Eso sí, desde 2014 ingresó en franca declinación (2).

El poder del Aguara Güe ya se anunció hace un siglo, sus primeros pozos petroleros fueron explotados por la Standard Oil Company en 1923 (3). En mayor o menor medida, dependiendo del historiador que se consulte, este recurso influyó en la Guerra del Chaco. Cualquiera que haya sido la importancia del componente hidrocarburífero para aquellos contendientes, ese objeto del deseo geopolítico estaba en el Aguara Güe. Frente a él, entre enero y junio de 1935, se libró la defensa de Villa Montes, que zanjó el final de la guerra.

Eran tiempos en los que el mundo ingresaba en su hasta hoy irrefrenable adicción a los combustibles fósiles. No por nada en diciembre de 1936 Bolivia fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el 13 de marzo de 1937 nacionalizó los hidrocarburos. Entonces “ecología” apenas era un neologismo alemán inventado por el biólogo Ernst Haeckel, y en vías de traducción oficial. Por ello, se iniciaba para el Aguara Güe por lo menos medio siglo de sostenida, creciente e impune depredación, a cuenta de las petroleras. Entonces la discriminación era ley en Bolivia, no había derechos para los pueblos indígenas, sino esclavitud.

Ese primer boom de los hidrocarburos bolivianos, ya motivó la llegada de tres visitantes ilustres al Aguara Güe. El 23 de octubre de 1947, los presidentes Enrique Hertzog (Bolivia) y Juan Perón (Argentina) se reunieron en Sanandita. Acompañaba al segundo quien sería protagonista central de los actos, su esposa, la mítica Eva (“Evita”) Duarte de Perón. Se proyectaron acuerdos de exportación y las obras ferroviarias y viales que serían financiadas con la producción hidrocarburífera (4).

MUCHO MÁS QUE GAS

Claro, en ese tiempo no se podía entender que estos montes eran mucho más que petróleo y que sus pobladores tenían derechos. El Aguaragüe se ubica entre los 1.900 y 750 metros sobre el nivel del mar. Por ello, esta transición final entre Andes y Chaco, verde y boscosa, colmada de vida, constituye un oasis tropical antes de la planicie ardiente. Como varios de los parques nacionales de Bolivia (considerado el 15 país más biodiverso del planeta) alberga, aún, singulares variedades de flora y fauna. Por ello fue declarado Parque Nacional y Área de Manejo Integrado en 1996.

Ha destacado por una proverbial riqueza forestal, abundaban lapachos, quebrachos, cedros, almendrillos... Es decir, se hizo célebre por contener las maderas más cotizadas por la mueblería fina. Pero además, el Aguaragüe es fuente hídrica fundamental, se calcula que provee el 70 por ciento del agua que consume la provincia Gran Chaco (5). Gracias a sus vertientes viven las ciudades siamesas de Yacuiba (Bolivia) y Salvador Mazza (Argentina), además de Caraparí, Villa Montes y varias poblaciones menores. En suma, entrega este recurso cada vez más caro y escaso a cerca de 200 mil personas. (VER RECUADRO 3)

“Es lo que se denomina una fábrica de agua –dice Rodrigo Ayala director de la ONG Prometa-. Esto porque va absorbiendo la humedad de las nubes y esa agua va fluyendo hacia abajo durante todo el año. El Chaco tarijeño se caracteriza por ser muy rico en comparación a los de Santa Cruz o Chuquisaca, por este efecto esponja que tiene el Aguaragüe. Es mucho más pequeño que el Chaco cruceño, pero allí vive igual cantidad de gente porque la tierra es mucho más fértil y rica”.

Es decir, el Aguaragüe es un cerro rico por donde se lo mire y explore. Contienen valiosos recursos desde sus entrañas petroleras hasta esos cielos que fabrican lluvias con sus árboles de maderas preciosas y abundante vida salvaje. Pero estos 111 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, más ricos de Bolivia y buena parte de sus alrededores no tienen suerte.

EXPLOTADO, “A LA MALA”

Por el contrario, la memoria de esa depredación es testimonio recurrente entre sus pobladores. “Hay quienes dicen que significa ‘el pelaje del zorro’ porque en guaraní ‘Aguar’ quiere decir zorro y ‘tagüe’ es pelo –aclara Víctor Barrios, capitán grande guaraní de Caraparí-. Pero también otros explican que viene de ‘Yagurete’, jaguar y ‘tagüe’, pelo, porque en este lugar había sobre todo jaguares a los que nosotros llamamos tigres. Como sea, el pelaje del tigre o del zorro hoy está demasiado destruido y el daño es cada vez peor”.

Y el daño que se le infiere y ha inferido a esta serranía abarca también desde sus oleosos subsuelos hasta su húmeda atmósfera. Y el castigo llegó mucho más rápido que los remedios, en algunos casos con por lo menos 70 años de diferencia. Baste señalar que recién este abril de 2017, YPFB completó la remediación de dos pasivos ambientales en la zona de Sanandita. Avanzaba además trabajos en otros siete agotados pozos de los cuales durante décadas manó crudo residual que contaminaba ríos y quebradas.

Pero el grueso de la turbia herencia de la explotación petrolera, tan solo en Sanandita, se halla aún sin remediar. Resta encapsular otros 23 viejos pozos, cuyos fluidos o emanaciones han afectado la vida de cientos de pobladores guaraníes. Recurrentes reclamos ante diversos gobiernos y ejecutivos de empresas denunciaban lo que aún suele ser frecuente: aguas cristalinas que de pronto empiezan a enturbiarse con remolinos aceitosos. También surgen pedrones cubiertos de espesa sustancia negra y zonas donde el aroma del bosque es reemplazado por un hedor a alquitrán o diésel.

“El ganado y la gente o se enfermaban o, simplemente preferían no beber estas aguas –recuerda Roberto Quispe, un ex capitán guaraní-. Y todo porque ni YPFB ni las petroleras querían hacerse cargo de los pasivos”. Resume así el esquivo del bulto de la reparación ambiental que impidió empezar a superar, apenas, el drama

de la quebrada de Corocoy hasta 2011. Y “el bulto” ha implicado, para los nueve pozos, gastar 2,7 millones de dólares, una minucia frente a las inversiones habituales de este negocio. Son las huellas de la explotación petrolera del siglo XX. Las de la era gasífera suman más y tienen otras características.

La segunda semana de febrero tres dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y el autor de este reportaje recorrimos el Aguaragüe. Tras visitar los viejos pozos en proceso de remediación en Sanandita, el viaje se amplió a Timboy, en el bloque sur de la serranía. Repentinamente, en medio del monte, apareció un descampado en proceso de erosión, al medio una estaca metálica identificaba un pozo estéril sellado: “TIMBOY X2”/ PETROANDINA”.

“Dijeron que iba a haber un TCF de gas acá, hasta Evo Morales vino, ¡nada! –recuerda el capitán grande de Yacuiba, Jorge Mendoza-. Nosotros luchamos un montón, les pedimos que no intervengan aquí, pero ellos insistieron. Para no pagar indemnizaciones, vadearon zonas comunales y arruinaron vertientes, en especial el Chorro, un dique natural que abastecía a cientos de comunarios. Destrozaron incontables árboles con maquinaria, ¡a la mala!, no hallaron nada, dejaron estas plantitas, dizque como ‘remediación’, ¿y el Chorro?”.

LA TOMA DEL PARQUE

Timboy es apenas uno de los problemas que la toma sostenida de estos montes ha causado a sus habitantes. La causa es clara: entre principios de los 90 y los días que corren, el Aguaragüe ha sido el protagonista central del mayor boom económico de la historia boliviana. El Producto Interno Bruto pasó de 10.080 a 33.855 millones de dólares, principalmente gracias a las exportaciones de gas (41,8 por ciento del total).

Tres de los cuatro principales megacampos del auge gasífero (San Alberto, Sábalo e Itau) están en el centro de la serranía. El cuarto megacampo, Margarita, se halla en las inmediaciones. De los tres primeros reservorios sale el 50,6 por ciento de la producción nacional de gas, del cuarto cerca del 25 por ciento (6).

Sin embargo, todo el proceso de prospección, perforación de pozos y producción de esa riqueza se ha traducido en otro boom menos amable: el de la depredación ambiental y su consecuente castigo a las comunidades indígenas de la zona. A principios del anterior siglo la Standard Oil concentró sus trabajos sobre un área de 40 mil hectáreas aproximadamente. Pero desde los años 90 las petroleras fueron autorizadas virtualmente a copar todo el Aguaragüe.

En 2003 la transnacional brasileña Petrobras exploraba y explotaba los bloques sur y oeste (San Alberto y San Antonio), una superficie de 89.582 hectáreas. Paralelamente, la British Gas (Chaco S.A.) tenía a su cargo 57.690 hectáreas entre el centro y el norte del cerro (7). En total, 147.272 hectáreas, es decir, una superficie equivalente a 2,5 veces el área metropolitana de La Paz – El Alto.

Y sobre esa área y sus habitantes llegó la maquinaria petrolera. Se abrieron caminos de acceso y sendas perpendiculares de exploración sísmica de entre 1,2 y 3 metros de ancho, que suman aproximadamente 6.300 kilómetros. Se realizaron, en promedio 6.000 explosiones de dinamita por cada 25.000 hectáreas en función a los métodos de prospección 2D y 3D. Se perforaron miles de pozos, se instalaron decenas de plantas de procesamiento y refinación, y se construyeron campamentos, pistas y helipuertos (8).

El segundo cerro rico boliviano sabe a un escenario similar al de un asalto militar sistemático contra una extraordinaria reserva de vida. “La toma del Aguaragüe ha sido tan abusiva que las petroleras hasta han llegado a impedir que circulemos por nuestras sendas ancestrales –recuerda Roberto Quispe-. Había compañeros durmiendo en medio del bosque porque en la noche los guardias les cerraban el paso, incluso a veces en una emergencia. Sucede eso, aún hoy, en Tucinty, campo San Antonio”.

LOS DAÑOS AMBIENTALES

Entre 1996 y 2006, a las empresas que explotaron el Aguaragüe diversos gobiernos les facilitaron sus labores flexibilizando el cumplimiento de las normativas ambientales. En mayo de 2006, el nuevo régimen de Movimiento Al Socialismo, tras nacionalizar los hidrocarburos, impuso una serie de auditorías a las transnacionales. El entonces ministro de Energía, Andrés Soliz Rada, encargó aquella labor a los ingenieros Javier Escobar y Enrique Mariaca. Tras ejecutar esa misión, Mariaca informó: “Ninguna empresa petrolera cumplió la Ley 1333 de protección al medioambiente”.

Aquel informe registró 485 pasivos ambientales en el país y consecuentes obligaciones por 61 millones de dólares para las petroleras. En total, 135 de esos pasivos se ubican en el Aguaragüe, llegan a 195 si se suma los dejados en Margarita. “Proceder a la remediación inmediata por ser procesos erosivos”, dice el acápite ‘observaciones’ del informe en relación a 19 casos hallados en San Alberto. “Áreas erosionadas con deslizamiento, erosión severa”, añade para los diez pasivos del campo Sábalo (9).

Para sorpresa de Mariaca y del propio Ministro Soliz, el Gobierno desestimó aquellas auditorías y nunca fueron utilizadas contra las transnacionales. En septiembre de 2006, Soliz renunció al cargo. Igual que Mariaca, recurrentemente preguntó a las autoridades por qué negociaron nuevas condiciones con las petroleras sin apelar a lo descubierto en las investigaciones. El actual presidente de YPFB, Guillermo Achá, ha zanjado el tema asegurando que todos los casos se hallan bajo control.

A fines de 2016, le preguntamos cuánto se logró remediar de los casi 200 pasivos ambientales. Achá respondió: “Dentro de lo que son los contratos de operación, nosotros tenemos una cuenta a la que va destinado desde el primer mes de operación un capital que es obligado tener disponible para el tratamiento de todos los pasivos ambientales cuando se abandone el campo. Entonces ya contractualmente está garantizado que estos pasivos van a ser atendidos (...). Todos los contratos que tenemos tienen previsiones, se están atendiendo y no tenemos ningún pasivo ambiental, llamado como tal, que no esté siendo atendido” (*) (10).

Como sea, a ojos vista, queda claro que cuanto se haya hecho ambientalmente por el Aguaragüe siempre resultará poco. Entre las consecuencias de la explotación hidrocarburífera sumaron más que sólo los técnicos pasivos ambientales. Por ejemplo, las sendas de exploración y los caminos de la explotación no sólo sirvieron a los trabajadores petroleros. También se abrieron para colonizadores, madereros, traficantes de especies y otras mercancías ilegales, cada cual trayendo su propio infierno.

A veces, literalmente infierno porque desde fines de los 90 la zona es víctima de incendios forestales, generalmente causados por colonizadores. Tuvieron su pico en 2009 cuando arrasaron aproximadamente 3.200 hectáreas de bosque y cruzaron la frontera con Argentina. Forzaron la movilización de militares y hasta helicópteros hidrantes del vecino país (11).

“Ya más o menos se ha controlado eso – dice el capitán Mendoza, mientras recorremos por la zona de Busuy-. Este año hubo varios focos de fuego, pero no como otros años”. Sin embargo, minutos más tarde resultaba

claro que la otra forma de acabar con el bosque sigue boyante a plena luz del día: delante de un túnel de hierbas, que camufla una senda, se acumulaba madera recién aserrada y lista para traslado.

Según la Autoridad de Fiscalización de Bosques (ABT), los municipios de Entre Ríos, Yacuiba y Villa Montes lideran la extracción de madera en Tarija. Entre 2012 y 2013 se decomisaron 114.161,47 pies tablares de maderas y entre 2014 y 2015, ese total llegó a 206 mil pies. Tanto autoridades como estudiosos del tema aseguran que el ritmo de deforestación ha ido agotando de maderas al Aguaragüe sobre todo desde 2010 (12). Un diagnóstico que recuerda a otro tipo de saqueo que transita etapas más avanzadas: el exterminio de la fauna del parque.

“Los animalitos se han ido cada vez más lejos y otros han desaparecido, había monos, cascabeles, jaguares, etc. Mucha fauna desapareció,—dice Víctor Barrios, capitán de Caraparí. Cada vez se escucha menos voces de pájaros, los han espantado las exploraciones, pero también los eliminaron los cazadores”. Es la memoria de una bonanza del tráfico de especies, pues a principios de los 2000 Yacuiba era virtual supermercado de animales silvestres. Entonces destacaban famosos barones del contrabando de felinos, aves y reptiles, como Walter Fernández, “el uruguayo” quien tenía un “zoológico” de acopio (13).

De aquel tiempo, hoy en Yacuiba y Villa Montes quedan notorios vestigios en diversos hoteles y restaurantes. Sus interiores suelen estar ornamentados con esqueletos de pumas, jaguares, serpientes conservadas en alcohol o aves disecadas. En el celeberrimo “El Azador” de Yacuiba, por ejemplo, ejecutivos o funcionarios de petroleras diariamente degustan jugosas carnes argentinas delante de las osamentas.

En ese marco, el biólogo Donovan Osorio considera al Aguaragüe, como “el más afectado de los parques nacionales de Bolivia”. “Es una zona muy particular, biogeográficamente una isla, por lo delgada y alargada, —dice Osorio, quien trabajó en la región durante varios años—. En ella se encuentran dos sistemas, la flora y fauna tienen características particulares por eso. Una isla que además produce extraordinarias cantidades de agua, pero a los bolivianos solo les interesa sacar hidrocarburos de allí”.

Sin duda, resulta difícil la labor para los 12 guardaparques que cuidan el Aguaragüe en representación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la APG. Más si se considera que ganan apenas entre 2.100 y 3.800 bolivianos (entre uno y menos dos salarios mínimos) y se hallan mal pertrechados. Se han convertido en una especie de voceros muchas veces desesperados de las desgracias que castigan al parque. Poco o nada pueden esperar de las fuerzas del orden, sean policiales o militares.

Peor aún, la Escuela de Cóndores de Bolivia (fuerzas especiales) ocupa 14 mil hectáreas en Sanandita, es decir, en la base del Aguaragüe. Esta institución castrense ha generado polémicas por ser objeto de recurrentes denuncias de violaciones al medio ambiente y los derechos humanos. Prácticas regulares, en las que desollan canes, o, eventuales, haciendo lo propio con animales del parque, han sido filmadas, pero no hubo sanción alguna. Envalentonados, en los desfiles militares y delante el palco presidencial, los comandos suelen marchar exhibiendo como trofeo fauna del bosque.

LOS BENEFICIARIOS DE LA BONANZA

Así queda claro que las autoridades, por lo general, reaccionan frente a las diversas agresiones al Aguaragüe con una lentitud proverbial, si reaccionan. Mientras tanto, los 34 mil millones de dólares de renta gasífera boliviana en 15 años suman el pago por sacrificar el parque (14). Eso más cuanto hayan ganado las petroleras. Pero, a ojos vista, casi nada le tocó al pueblo que habita desde hace 2.000 años el segundo cerro rico.

Las precarias casitas de tablones de Pozo del Hanta no están en un confín inaccesible, sino a 90 kilómetros de Yacuiba, pie del Aguaragüe. Más cerca aún de las ventajas de la modernidad, en Timboy Tiguazu, (75 kilómetros de Yacuiba) Jorge Vallejos, el capitán de esa comunidad de 18 familias tiene reclamos similares. Valora la casa que le han construido, pero remarca que no tiene agua, cocina a leña y se pregunta con tono apesadumbrado: “¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Porque cualquier rato se va a acabar el gas y nosotros seguimos en lo mismo”.

Ya en el ingreso al área suburbana, a 9 kilómetros de Yacuiba, se halla Yerobiarenda, que significa “el lugar de la alegría”. Era alegre, sí, según cuenta Raquel Sosa, la segunda capitana, pero desde hace un año ya no más. “Era un lugar tranquilo, fresco, todo el mundo envidiaba el vivir aquí, pero desde que funciona la planta se siente la calor”. Sosa alude a un calor mórbido que coincide con la aparición de irritaciones en los ojos y la garganta, generalizados especialmente en los niños.

Yerobiarenda se halla aproximadamente a 1.000 metros al norte de la planta separadora de gas del Gran Chaco. La capitana recuerda que les prometieron que aquel complejo de casi 700 millones de dólares no les causaría problemas. Pero padecen de ruidos maquinales, humo, emanaciones de gas y ese calor añadido al que, con hasta 42 grados celsius, ya naturalmente asola al Chaco. Las 24 casitas que construyeron las autoridades y el agua que irregularmente traen cisternas tampoco compensan el decaimiento que sufren sus huertos de subsistencia.

En el contaminado y deprimido “lugar de la alegría” se cocina con gas de garrafa y hasta eventualmente con leña. Curiosamente, se halla rodeado de complejos de distribución del energético. A menos 500 metros hacia el norte pasan tuberías que distribuyen el gas entre el ducto de exportación a la Argentina y diversas plantas. A otros mil metros hacia el oriente aparecen flamantes camiones que llevan el gas licuado hacia Paraguay.

“EL MUNICIPIO MÁS RICO DE SUDAMÉRICA”

Pero las quejas y asombro guaraníes son aún mayores en Caraparí, arriba, a 870 metros sobre el nivel del mar, centro neurálgico del Aguaragüe. Este municipio de 16.000 habitantes hasta cierto momento fue la versión sudamericana de la afamada serie televisiva de los Beverly Ricos. En los años 90, era poblado de paso entre Tarija y Yacuiba, tenía menos de 5.000 pobladores. Pero un día, a sólo 14 kilómetros se descubrió el hoy afamado megacampo San Alberto.

El santo les hizo el milagro, eran ricos. Los carapareños estaban literalmente parados sobre el gigantesco reservorio que desde hace 18 años provee de energía al centro industrial de Brasil. Su importancia fue tal que dos hechos históricos se centraron en Caraparí: en noviembre de 1999 se reunieron los presidentes Henrique Cardoso (Brasil) y Hugo Banzer (Bolivia) para rubricar los acuerdos de la naciente exportación. Y seis años más tarde, el 1 mayo de 2006, Evo Morales anunció allí la tercera Nacionalización de los Hidrocarburos.

En ese periodo, el Aguaragüe no sólo concentró el agua de lluvia, sino también una lluvia de dólares. Sólo por regalías hidrocarburíferas, en el año 2014, Caraparí recibió 83 millones de dólares y cerca de 6 millones adicionales por otros ingresos (15). Es decir, 318 veces más que en 2001, cuando percibía alrededor 280.000 dólares (16). “Según explicaron los expertos –dice el capitán Gómez-, se convirtió en el municipio con mayor ingreso fiscal per cápita de Sudamérica y posiblemente de Latinoamérica”.

Pero esos ingresos, junto con el gas, parecen haberse evaporado. Jugando con la imaginación, si se hubiera distribuido la renta petrolera a los 16 mil carapareños a partes iguales durante al menos 3 años, a cada uno de ellos le habrían tocado 450 dólares mensuales. Es decir, en promedio, cada familia hubiese recibido 2.250 dólares al mes, sin mover un dedo, 2.250 dólares para un trienio de holganza o emprendimientos. Pero los

políticos administradores resultaron tan ineficientes que los problemas de Caraparí hoy son similares a los de los municipios más pobres del país.

Y sufren especialmente los guaraníes. Marginados, ignorados, sometidos, aún en tiempos en que se habla de su reivindicación, están los pobladores indígenas del centro del Aguaragüe. En el entorno del pueblo, carecen de la mayoría de los servicios básicos. Más allá, a 15 a 30 ó 50 kilómetros pequeños caseríos reproducen escenarios de la pobreza extrema, no tienen ni tierras para labranza (VER RECUADRO 2).

Recuerdan a los mitayos de hace dos y más siglos del Sumaj Orko potosino. A aquél llegaron desde virreyes y encomendados, pasando por Bolívar y los ejércitos libertadores argentinos, hasta Víctor Paz y Gonzalo Sánchez de Lozada. Al segundo cerro rico llegaron la Standard Oil de los Rockefeller, Perón, la mítica Evita; luego la Petrobras, Cardozo, Banzer y Evo. A ambos los llenaron de loas y versos, para luego abriles las venas de su riqueza.

Del cerro rico potosino, hoy al borde del desmoronamiento, manaron plata y estaño al que Augusto Céspedes llamó “el metal del diablo”. Una alusión a la fiebre minera que marcó siglos de injusticias y genocidio. De la arrasada montaña chaqueña emergieron gas y petróleo, al que Juan Pablo Pérez Alfonzo (**) apodó “el excremento del diablo”. Un sintético contraste con aquellos tiempos en que los guaraníes recuerdan haber vivido en absoluta armonía con su bosque, al que llamaron “Ivy Maraey”, la tierra sin mal.

DE “LA ERA DE ORO” A LA DE LAS LEYES

LOS TÉCNICOS DE YPFB Y OTRAS EMPRESAS QUE TRABAJAN EN EL AGUARAGÜE ASEGURAN QUE HOY SE TRABAJA RESPETANDO LAS NORMAS AMBIENTALES. HABLAN SOBRE UN EXTRAÑO CASO EN YEROBIARENDA. PERO, RECONOCEN LA FALTA DE AYUDA A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

A lo largo de un siglo, el Aguaragüe primero fue desmontado con virtuales garras de tractores, trepanado miles de veces y conmocionado a dinamitazos. Y recién tras casi ocho décadas, se le aplicaron normas ambientales que, luego de 10 años más, entraron en vigencia. En semejantes lapsos, a los habitantes originarios del segundo cerro rico se los persiguió, esclavizó y explotó. Y, desde hace 15 años, aproximadamente, se les toma en cuenta sus derechos y comunica qué más se les piensa hacer a sus serranías.

Bajo ese peso histórico trabajan en la zona técnicos de YPFB, de las empresas remediadoras, la separadora y las petroleras. Cada uno deriva las aclaraciones oficiales a: Sao Paulo (Petrobras); Santa Cruz, para la Separadora, y La Paz, los de Yacimientos. Pero, algunos sí aceptan explicar los problemas que afectan a los guaraníes del Aguaragüe.

¿Por qué remedian sólo nueve de los 32 antiguos pasivos de la zona de Sanandita?

“Eso responde a un análisis riesgos (ambientales, sociales y técnicos)- aclara un funcionario de YPFB-. Se priorizaron nueve pozos en base a reclamos de comunidades por los problemas de contaminación que les causaban. Son muy antiguos, algunos de 1917, que eran de la Standard Oil y otras empresas. Hay un pozo tan antiguo, en Itavicua, que no se pudo identificar quién lo realizó”.

¿Por qué las organizaciones guaraníes señalan que generalmente no hubo procesos de consulta y participación previas a los trabajos?

“Se los hace en todo proyecto donde existe una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), incluso si sólo está demandada, tal cual señalan las normas –explica otro técnico-. Pero en varios lugares no hay TCO o se hallan en medio otro tipo de propiedades. Ahora, lo que se hizo antes de las leyes 1333 (del Medio Ambiente – año 1997) o 3058 (Hidrocarburos – año 2005) escapa a nuestras manos”.

¿Por qué hay tan poco apoyo estatal a las comunidades indígenas?

“Se desarrollan proyectos de vivienda, de agua e incluso la construcción de postas sanitarias. Por ejemplo, en la TCO de Yacuiba hay un programa de inversión social que fue fruto de una dura negociación. El problema es que recién en 2014 se puso en vigencia el decreto 2195 ‘De Compensación’. Antes regía la lógica de la compensación en dinero efectivo entre empresas y organizaciones indígenas, lo que causó daños morales a todas las partes involucradas. El Gobierno buscó una alternativa para que haya algún nivel de control. La compensación es beneficio extraordinario, no un derecho, y por lo tanto se lo puede reglamentar. Ahora, claro, hay comunidades extremadamente pobres y que deberían ser mejor atendidas”.

¿Qué pasa en Yerobiarenda, que dejó de ser “el lugar de la alegría”?

“La zona de la Separadora de Líquidos debía ser declarada industrial por el municipio. Extrañamente al lado de la planta actuó un agente económico que compró un terreno y apareció la comunidad de Yerobiarenda. Es decir, no es una TCO, sino un terreno privado donde se instaló una comunidad guaraní cuando ya se había empezado a construir la planta. Por lo tanto, no le compete consulta y participación. Como hubo presiones sociales y para no retrasar más el proyecto, se les financió viviendas.

Hoy se cumplen todas las normas ambientales porque el Estado maneja el negocio de los hidrocarburos. Antes era una relación entre empresas privadas y comunidades. Y más antes era lo que los antiguos petroleros llaman ‘la era de oro’. Entraban con topadora abriendo sendas, si tenían que matar, mataban, y a veces también los mataban, ya sea los tigres o las flechas”.

CARAPARÍ, “LA CAPITAL DEL GAS”

EN CARAPARÍ LA ERA DE LA ESCLAVITUD CONCLUYÓ RECIÉN EN 2010, SIN EMBARGO FUE CONTINUADA POR LA MARGINACIÓN DE LOS GUARANÍES. LA HISTÓRICA BONANZA DEL GAS YA ABANDONA EL PUEBLO, NUNCA LLEGÓ A LOS INDÍGENAS

Basta llegar a la denominada “capital del gas” y alejarse 500 metros de la plaza principal para descubrir que sus viejas lagunas cloacales colapsaron. Su hedor contamina el lado oeste del centro urbano, sus rebalses cruzan riachuelos de aguas limpias que servían para el consumo doméstico. Porque, claro, buena parte de los carapareños aún debe buscar vertientes ante los crónicos problemas en la provisión de agua potable. Debe hacerlo de día porque la luz eléctrica falla recurrentemente.

Y dos terceras partes del pueblo cuidan de no gastar su garrafa de gas en lámparas pues, aunque viven sobre el megacampo, carecen de gas domiciliario. Viven alrededor del pavimento urbano, son campesinos e indígenas. Hasta 2014 sólo 216 familias tenían servicio gasífero doméstico, es decir, apenas un año antes de que empiece a acabarse la bonanza. Esa bonanza que hoy no sólo responde a la caída de precios internacionales del gas, sino además al agotamiento del megacampo San Alberto que disminuyó su producción en un 40 por ciento (a).

Los ingresos anuales de Caraparí cayeron de 89 millones de dólares a cerca de 20 millones entre 2014 y 2016 (b). Por ello, las obras que se realizaron empiezan a lidiar con los fantasmas del abandono. El hospital Virgen de Guadalupe, por ejemplo, con infraestructura de tercer nivel, fue concluido en 2015, pero carece de personal y equipos. Por ello, no se realizan ni cirugías ni estudios de rayos “x”.

Los servicios de desayuno y transporte escolar, logros celebrados por las autoridades del lugar hace 8 años, decayeron. Ahora les redujeron de 8 a 3,5 bolivianos el costo de cada desayuno y de 9 a 3 millones el presupuesto para buses. Las instituciones iniciaron despidos, la Alcaldía retiró a 250 de sus 600 funcionarios.

Hay quienes se hallan aún peor: los más antiguos habitantes del lugar. “En Caraparí hay guaraníes que no tienen casa ni tierras, viven de caseros, de inquilinos, a lo mucho pueden trabajar 5 hectáreas y les falta todo – dice el capitán grande Víctor Barrios –. No nos tocó ni un pito del gas”.

Barrios sintetiza así una de las historias de despojo y explotación más intensas del Aguaragüe. Primero, durante décadas, decenas de hacendados les quitaron sus tierras y, tras dura resistencia, los sometieron a la esclavitud que duró hasta hace un lustro. “Incluso en tiempos de Evo hubo esto de la servidumbre y especialmente en Caraparí –dice el capitán Román Gómez–.

El año 2004 el Gobierno de Carlos Mesa la prohibió, entonces se sometía a familias enteras al servicio no remunerado. Pero la práctica continuó, por lo menos hasta 2010. Ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguraba que 600 familias guaraníes del Chaco boliviano vivían en condiciones de esclavitud (c). Decenas de ellas en torno a Caraparí. “A partir de 2009 -2010 eso desapareció –dice Gómez–, pero nada más, la pobreza sigue”.

El capitán guaraní se refiere a los procesos posteriores en los que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria no recuperó tierras para los indígenas. Luego, los hacendados acunaron acuerdos con petroleras y autoridades. Hoy, sin haber recibido más beneficios que unas sedes culturales, los guaraníes son los inquilinos de terrenos de los que cualquier día se les invita a partir.

En la junta de capitanes de la APG Caraparí los reclamos se multiplican. “Una garrafa de gas me cuesta 32,5 bolivianos (12,50 más que en el resto de Bolivia) –explica Herlinda Fernández–. La distribuidora cobra 22,5 y el taxi sale a 10”. Por eso deben cocinar frecuentemente a leña, como otros comunarios, aún más desafortunados.

Y los más desposeídos se hallan en el entorno carapareño. Viven junto a parcelitas y sus hijos apenas vestidos y, frecuentemente, enfermos. En años recientes hubo epidemias de salmonela y hepatitis, posiblemente por aguas contaminadas. Viven en casuchas de tablones. Se hallan dispersos en comunidades como Nazareno, Atajado, hacia el norte, o Cañitas y Salitral, en la vía a Itau, otro megacampo.

Un contraste con el edificio de la Subgobernación de Caraparí. Costó casi tres millones de dólares. Ocupa cerca de una hectárea, está colmado de ventanales, patios con baldosas, una piscina ornamental y decenas de espacios para oficinas que se muestran vacíos. En sus pasillos oscuros parece sonar el eco del ocaso de la era del gas.

“POBRE CHACO SI SE ACABA EL AGUA DEL AGUARAGÜE”

LA SEGUNDA MAYOR RIQUEZA DEL AGUARAGÜE ES EL AGUA, MÁS AÚN EN TIEMPOS EN LOS QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL CASTIGA MÁS AL CHACO. PERO, SE TEMEN QUE LOS RIESGOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL Y RONDA LA ZONA EL FANTASMA DEL FRACKING

Junto con el gas, el otro valor estratégico del Aguaragüe constituye el agua, que cada vez vale más. “El Chaco siempre fue seco, pero en los últimos cinco o seis años se ha agravado fuertemente la sequía –dice el capitán Víctor Barrios–. Ya se comenta mucho sobre el cambio climático. Si no fuera por el Aguaragüe, pobre Chaco si se acaba el agua de sus vertientes”.

No se trata de temores azarosos, tanto guaraníes como expertos han advertido el riesgo de proyectos en pleno cerro. Temen especialmente que la construcción del túnel que acortaría la carretera Caraparí – Campo Pajoso destruya las venas principales de agua y desate una catástrofe. El proyecto para perforar la montaña y abrir un túnel de 1.200 metros cuenta con financiamiento (10 millones de dólares) y diseño final. Pero lo que no hay son estudios sobre flujos de aguas subterráneas del parque.

Ya hace 11 años hubo un antecedente con un túnel construido por Petrobras para una de las líneas del gasoducto que va a Brasil. Lo construyeron en el área este y meses después ocurrieron escurrimientos anómalos de agua y avalanchas de lodo en partes bajas de la serranía. “Estuve allí, y en medio del túnel fluía agua –dice Rodrigo Ayala de la ONG Prometa-, era evidente que se rompían venas acuosas. Pese a ello, para el nuevo túnel (dos o más veces mayor) se libra una batalla legal y social. En ella ya hubo desde movilizaciones de guaraníes, en contra, hasta presiones de transportistas, autoridades ediles y, se asegura, de las petroleras, a favor.

Por lo demás, la provisión de agua es recurrente sinónimo de frustración En las faldas del Aguaragüe se hallan tres de las obras que con más pompa anunciaron las autoridades a favor del pueblo guaraní: las represas de Caigua, Busuy e Itavicua. “Caigua ha sido un fracaso, mire, huela esta otra –dice el capitán Mendoza en Busuy-, ya no sirve ni para lavar ropa”. Un hedor a putrefacción impregna el entorno de la presa cuyas aguas fueron recubiertas por una capa verdosa.

Cálculos mal hechos no previeron la acumulación de materia vegetal en el dique y en menos de dos años colapsó. Pero Busuy “Chaco Seco”, estrenada en junio de 2007, no constituye el peor de los casos. Caigua, en el sector villamontino del Aguaragüe, fue también construida en 2007, cerca de pasivos ambientales y áreas de prospección. En el plazo de medio año empezó a ser contaminada por filtraciones petroleras.

A mediados de 2016, el laboratorio de la Universidad Juan Misael Saracho declaró las aguas de Caigua como no aptas para el consumo humano. Por ello, la actual construcción de la presa de Itavicua despierta más preocupación que esperanza entre los guaraníes. “Las empresas vienen, sacan sus utilidades y se van –dice Mendoza en Itavicua-, dos presas andan con problemas, a ver si esta resulta diferente”. Félix Gallardo, el ingeniero responsable de la obra, le responde: “Construí 24 y de ninguna tengo quejas”.

Una sombra se suma a los entuertos que afectan al agua del Aguaragüe y los cerca de 10 mil guaraníes que lo habitan. Se cruza con el agotamiento de las reservas de gas y los fracasos de los últimos proyectos de exploración como Timboy: la posibilidad de que las autoridades apuesten por proyectos de fracking (fractura hidráulica) en la zona (i).

Cuando le preguntamos en 2016 al presidente de YPFB, Guillermo Achá, sobre esta posibilidad, respondió: “Hay que tomar con mucho cuidado el tema de la recuperación secundaria, con el contexto actual. Es una tecnología que no es una exploración habitual, es más cara y hoy no sería tal vez conveniente realizarla. Sin embargo estamos realizando estudios de factibilidad en algunos campos, ya maduros, (para) poder contar con una recuperación secundaria.

Lo están haciendo YPFB Andina y YPFB Chaco (...). Tenemos la responsabilidad como YPFB y estamos haciendo las evaluaciones previas para, en el caso de que haya buenos resultados y tengamos una recuperación de producción comercial que pueda beneficiar tanto a la balanza de nuestra producción de gas y a la economía del país, poder realizarlo”.

Como es sabido, el fracking se caracteriza por utilizar grandes cantidades de agua dulce para la recuperación de hidrocarburos. Y el agua en la zona empieza hasta por el nombre del segundo cerro rico boliviano.

(i) “Fracking, la fractura de la Madre Tierra”, Los Tiempos, 11-04-15 y “Is Bolivia going to frack the Mother Earth”, The Guardian, 24-02-15.